

POR UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE Y PARA LA CLASE TRABAJADORA

Diagnóstico y propuesta integral desde una perspectiva ecosocial

Resumen ejecutivo

ELA
EUSKAL SINDIKATUA

**MANU
ROBLES
ARANGIZ
FUNDAZIOA**



MANU ROBLES-ARANGIZ
FUNDAZIOA

Elaborado por el Gabinete de Estudios

@mrafundazioa

www.mrafundazioa.eus

Bilbo, junio de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. ¿Por qué necesitamos otra política industrial?	1
2.1. La industria no es un sector más.....	1
2.2. El regreso de la política industrial, ¿por qué ahora?	2
2.3. ¿Qué tipo de política industrial proponemos?	2
2.4. La transición ecológica: necesaria, pero no de cualquier manera	3
2.5. Las personas trabajadoras, en el centro	3
3. El contexto mundial y europeo: tensiones geopolíticas y crisis en Europa	4
3.1. Cuarenta años de desregulaciones y financiarización	4
3.2. El siglo XXI: una concatenación de crisis	4
3.3. El mundo se reorganiza: ¿y Europa qué hace?	5
4. Dagnóstico de Hego Euskal Herria	6
4.1. Una economía que crece, pero no como antes	6
4.2. Seguimos siendo un territorio industrial, pero la industria pierde peso.....	6
4.3. Los salarios no avanzan: una transferencia de riqueza invisible.....	7
4.4. La inversión no llega donde se necesita	7
4.5. La productividad mejora, pero a un ritmo contenido	7
4.6. Una economía dependiente del exterior	8
4.7. Los residuos industriales: un problema creciente	8
5. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Balance de la política industrial	9
5.1. La Unión Europea: grandes anuncios, resultados limitados.....	9
5.2. El Estado español: muchos planes, poca transformación	9
5.3. Hego Euskal Herria: densa arquitectura institucional sin transformación real	10
5.4. Lo que tienen en común: un patrón que no ha cambiado	10

6. Propuestas para un modelo diferente.....	11
6.1. Gobernanza: ¿quién decide?	11
6.2. Financiación: ¿quién pone el dinero y con qué condiciones?	12
6.3. Marco legal: cambiar las reglas del juego.....	13
6.4. Trabajo y formación: las personas en el centro.....	15
6.5. Recursos, territorio y soberanía: producir aquí, decidir aquí	16
7. Qué sectores priorizar, transformar y cuáles abandonar.....	18
7.1. Cadenas para la reproducción social: lo que necesitamos para vivir	18
7.2. Cadenas para la transición ecológica: cambiar cómo producimos energía y nos movemos	19
7.3. Cadenas para la capacitación tecnológica: saber hacer aquí lo que ahora compramos fuera.....	20
7.4. Sectores que deben reducirse	21
8. Conclusiones	22
8.1. Lo que el diagnóstico nos dice.....	22
8.2. Los tres principios que orientan las propuestas	22
8.3. Un camino, no un salto.....	23

1. INTRODUCCIÓN

Este documento resume el informe *Por una política industrial de y para la clase trabajadora: Diagnóstico y propuesta integral desde una perspectiva ecosocial* elaborado por el Gabinete de Estudios de ELA. Este informe incluye un análisis detallado y extenso de las políticas industriales de Hego Euskal Herria y está disponible en la página web www.ela.eus o www.mrfundazioa.eus.

El punto de partida del informe es una pregunta sencilla pero fundamental: ¿para qué sirve la industria, quién se beneficia de ella y quién debería decidir qué y cómo se produce? Tras un diagnóstico profundo tanto del recorrido, contexto y datos económicos, el informe concluye que la industria debe estar al servicio de las necesidades de la mayoría de la sociedad, no de unas pocas empresas y accionistas, y realiza diversas propuestas para encauzar cambios profundos que permitan construir un modelo económico más justo, más democrático y dentro de los límites biofísicos del planeta.

El informe se articula en cuatro grandes bloques. Primero, argumenta por qué es necesaria una política industrial activa y transformadora, y cuáles son sus fundamentos. Segundo, realiza un diagnóstico de la situación económica e industrial de Hego Euskal Herria, en el contexto de las tendencias mundiales y europeas. Tercero, hace un balance crítico de las políticas industriales que se han aplicado hasta ahora en la UE, el Estado español y nuestro territorio. Y cuarto, presenta un conjunto de propuestas concretas, tanto de carácter general como sectoriales.

2 ¿POR QUÉ NECESITAMOS OTRA POLÍTICA INDUSTRIAL?

Cuando hablamos de política industrial, nos referimos a las decisiones que toma el poder político sobre qué se produce, cómo se produce, quién lo produce y dónde. Durante décadas, la respuesta de la clase dominante a estas preguntas fue: que lo decida el mercado. El Estado debía limitarse a crear las condiciones para que las empresas privadas hicieran sus negocios, sin interferir demasiado. Hoy ese enfoque está en crisis.

2.1. La industria no es un sector más

La industria tiene características que la hacen especialmente relevante para el bienestar colectivo. Lo que fabricamos aquí no tenemos que comprárselo a otros países, lo que nos hace menos vulnerables a los vaivenes del comercio internacional o a las presiones de potencias extranjeras. Además, la industria tira de otros sectores: una fábrica necesita proveedores, transporte, servicios técnicos, formación... Cuando funciona bien, dinamiza el conjunto de la economía local. Y sobre todo, la industria tiene un impacto especial en la productividad (es decir, en cuánto somos capaces de producir con los recursos que tenemos), de la que depende en última instancia cuánto puede repartirse en una sociedad.

Pero no hay que entender la industria como un mundo aparte. La industria, entendida como el trabajo organizado para producir los bienes que necesita la sociedad, ocupa el centro de algo más amplio: la reproducción social, es decir, todo lo que hacemos como sociedad para sostenernos. Y en esa totalidad, el trabajo en una fábrica y el trabajo de cuidar a una persona son dos caras de la misma moneda: sin personas que cuiden, no hay personas disponibles para producir, y sin producción, no hay recursos para sostener los cuidados. Por eso el informe sitúa los trabajos de cuidados, sector feminizado e ignorado históricamente en los debates económicos, en el mismo plano que la industria y como parte de la política económica.

A esto se suman otros argumentos que refuerzan la apuesta por una política industrial fuerte: la industria ofrece empleo más estable que sectores como el turismo, contribuye a vertebrar el territorio y a dinamizar economías locales, y es clave para la innovación y la transición ecológica, al ser el sector capaz de desarrollar y producir los bienes necesarios para una economía baja en carbono.

Por todo ello, una política industrial decidida y planificada democráticamente debe estar en el centro de cualquier estrategia de transformación socioeconómica. No se trata solo de defender la industria a cualquier precio, sino de redefinir qué producir, cómo producir y para quién: con criterios sociales, ecológicos y territoriales, y reconociendo que los cuidados no son un complemento de la economía sino uno de sus pilares.

2.2. El regreso de la política industrial, ¿por qué ahora?

Durante los años ochenta y noventa, la idea de que el Estado debía intervenir activamente en la economía fue casi completamente desacreditada. La receta dominante era clara: mercados abiertos, pocas regulaciones, libre circulación de capitales y mínima intervención pública. La industria debía sobrevivir por sí sola, o desaparecer.

Ese modelo ha fracasado de forma cada vez más evidente. La deslocalización masiva de fábricas a países con salarios bajos dejó a millones de trabajadores sin empleo en Europa y América del Norte; la pandemia de 2020 demostró que Europa dependía de Asia para fabricar mascarillas y respiradores; las guerras y las tensiones geopolíticas han cortado suministros de gas, semiconductores y materias primas críticas; y el ascenso de China como potencia industrial ha roto el relato de que el libre mercado es siempre la mejor solución.

Hoy, tanto desde la derecha como desde la izquierda, todo el mundo habla de política industrial. Por lo tanto, el debate ya no es si el Estado debe intervenir, sino cómo y a favor de quién. Esta es precisamente la pregunta central del informe.

La aportación y nuestra crítica a Mariana Mazzucato

Una de las economistas más influyentes en este debate es Mariana Mazzucato. Su tesis sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir los fallos del mercado, sino a actuar como creador activo de mercados, definiendo prioridades colectivas y orientando la inversión hacia objetivos concretos: la transición ecológica, la salud pública o la soberanía tecnológica. El Estado no sería un lastre para la economía, sino el motor de algunos de los mayores avances tecnológicos de la historia: internet, el GPS o los smartphones surgieron, en gran medida, de la inversión pública y no de la iniciativa privada.

Compartimos buena parte de esta perspectiva, pero creemos necesario ir más lejos: defendemos que la clase trabajadora tenga poder real sobre las decisiones económicas, y no únicamente que el Estado defina misiones.

2.3. ¿Qué tipo de política industrial proponemos?

No pedimos simplemente más intervención estatal del tipo que ya existe. Lo que proponemos es una política industrial transformadora, guiada por tres principios fundamentales:

- Que las empresas estratégicas sean de propiedad pública, cooperativa o social, no privada.
- Que las personas trabajadoras tengan voz y voto real y decisivo en las decisiones económicas.

- Que lo que se produce responda a las necesidades de la gente y del planeta, no al afán de maximizar beneficios.

Para lograrlo, la política industrial debe actuar de forma coordinada sobre muchos frentes a la vez: la financiación, las leyes, las condiciones laborales, el acceso a recursos, las infraestructuras, la formación y el control democrático de las inversiones. No sirve de nada cambiar un solo elemento si el resto permanece inalterado.

2.4. La transición ecológica: necesaria, pero no de cualquier manera

La crisis climática no es una amenaza futura: ya está aquí. Más calor, más sequías, más inundaciones, más migraciones forzadas. Afrontar esta crisis requiere transformar a fondo el modelo de producción y consumo. Pero no todas las formas de hacer esta transición son iguales ni igual de justas.

Por un lado, el 'capitalismo verde' se basa en que se puede seguir creciendo del mismo modo que hasta ahora, simplemente sustituyendo el petróleo por paneles solares y los coches de gasolina por coches eléctricos. Somos muy críticos con este enfoque, porque no cuestiona las estructuras de poder que causaron la crisis, y porque olvida que la fabricación de todos esos nuevos productos también requiere materias primas, energía y genera residuos que el planeta no puede absorber indefinidamente.

En el otro extremo, hay quienes proponen reducir drásticamente la economía de forma rápida. Reconocemos la parte de razón que hay en esta postura, pero cabe señalar que sin una planificación democrática y justa, una reducción así caería con todo su peso sobre los trabajadores y los más vulnerables.

La propuesta que desarrollamos es una 'contracción material democrática' basada en una verdadera transición ecosocial: reducir el uso de materiales y energía, sí, pero de forma planificada, justa y decidida colectivamente. Eso implica reorientar la producción hacia lo que la gente realmente necesita, redistribuir la riqueza y el poder, y de esta forma, poner el conjunto del trabajo reproductivo en el centro de la economía.

2.5. Las personas trabajadoras, en el centro

Una de las ideas más importantes de nuestra propuesta es que cualquier política industrial que se llame justa debe poner a las personas que trabajan en el centro, no como engranajes del sistema, sino como sujetos activos con derechos y poder de decisión.

Esto tiene varias implicaciones. Por un lado, hay sectores que deben reducirse o desaparecer: armamento, combustibles fósiles, turismo masivo de largo recorrido. Esa reconversión debe realizarse garantizando los ingresos, formación y participación en las decisiones de las personas trabajadoras. Por otro lado, hay sectores que deben crecer: energías renovables, rehabilitación de edificios, agroecología, transporte público, cuidados. Todos ellos requieren mucho trabajo humano, están arraigados en el territorio y responden a necesidades reales de la población, ya que la industria es parte de un sistema más amplio de reproducción de la vida.

3. EL CONTEXTO MUNDIAL Y EUROPEO: TENSIONES GEOPOLÍTICAS Y CRISIS EN EUROPA

Para entender la situación económica e industrial de Hego Euskal Herria, es necesario mirar el contexto más amplio. Lo que nos pasa aquí no es independiente de lo que ocurre en el mundo.

3.1. Cuarenta años de desregulaciones y financiarización

Desde los años ochenta, el modelo económico dominante en los países occidentales ha favorecido sistemáticamente al capital financiero (bancos, fondos de inversión, accionistas...) en detrimento de los trabajadores, el sector público y el medio ambiente. Este modelo tiene varios rasgos distintivos:

- Privatización de servicios públicos (agua, energía, transporte, sanidad) que antes eran gestionados por el Estado.
- Reducción de impuestos a las grandes empresas y las rentas altas.
- Liberalización del comercio internacional, que permitió deslocalizar fábricas hacia países con salarios más bajos.
- Desregulación financiera, que permitió que el dinero circulara libremente por el mundo, buscando siempre la mayor rentabilidad a corto plazo.
- Debilitamiento de los sindicatos y de la negociación colectiva, lo que se tradujo en salarios más bajos y empleos más precarios.

El resultado ha sido un aumento enorme de la desigualdad: los ricos son mucho más ricos, los trabajadores tienen cada vez menos poder adquisitivo, y el dinero que antes se invertía en producir bienes y servicios útiles se ha desviado cada vez más hacia la especulación financiera e inmobiliaria.

Este modelo también ha destruido el planeta. La búsqueda constante de crecimiento económico ha intensificado la extracción de recursos naturales, la quema de combustibles fósiles y la generación de residuos a niveles que los ecosistemas no pueden absorber.

3.2. El siglo XXI: una concatenación de crisis

El siglo XXI ha estado marcado por una sucesión de crisis que interpretamos no como accidentes, sino como señales de que el modelo tiene fallas estructurales profundas:

- La crisis de las empresas puntocom (2000): el estallido de una burbuja especulativa en torno a internet demostró que el capital financiero puede inflar activos sin ninguna base productiva real.
- La Gran Recesión (2008): la mayor crisis financiera desde los años treinta, provocada por la especulación inmobiliaria y la opacidad del sistema financiero. Los gobiernos rescataron a los bancos con dinero público mientras recortaban servicios sociales.
- La pandemia del COVID-19 (2020): evidenció de forma brutal la fragilidad de las cadenas de producción globales. Europa no tenía capacidad para fabricar equipos de protección básicos; dependía de China y otros países lejanos para productos esenciales.

- La guerra en Ucrania (2022): disparó los precios de la energía y los alimentos, recordando que la dependencia de recursos estratégicos de otros países tiene costes políticos y sociales enormes.

Tras cada crisis, los gobiernos han aplicado medidas de emergencia sin cuestionar las causas profundas del problema. El resultado es que las desigualdades se han agravado y la inversión productiva, la que crea empleo real y bienes útiles, sigue siendo insuficiente.

Un dato clave: los salarios pierden terreno en todo el mundo

Desde al menos los años ochenta, la parte de la riqueza destinada a la clase trabajadora mediante los salarios ha disminuido en la mayoría de los países, mientras que la parte correspondiente al capital (beneficios, dividendos, rentas) ha aumentado. Esto significa que el crecimiento económico no beneficia por igual a todas las personas: aunque en el pastel es más grande, la mayoría se lleva una porción relativamente más pequeña. Este fenómeno también está ocurriendo en Hego Euskal Herria.

3.3. El mundo se reorganiza: ¿y Europa qué hace?

La hegemonía de Estados Unidos como potencia única está en declive. China se ha convertido en la primera potencia industrial del mundo. Los países del llamado Sur Global (África, América Latina, Asia) reclaman más autonomía y menos dependencia de las instituciones financieras occidentales. Los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros) están construyendo alternativas al sistema dominado por el dólar y las instituciones de Washington.

Europa, en este contexto, ha perdido margen de maniobra. Su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad militar, su vulnerabilidad energética (como se demostró con la crisis del gas tras la guerra en Ucrania) y su incapacidad para actuar con autonomía frente a las grandes potencias la sitúan en una posición subordinada en la nueva geopolítica mundial.

La respuesta de la Unión Europea ha sido anunciar grandes planes de reindustrialización y transición ecológica (el Green Deal Europeo, la Brújula para la Competitividad, fondos como el Next Generation EU...) pero, en la práctica, estos instrumentos siguen funcionando con la lógica del sistema anterior: el dinero público garantiza los riesgos, pero los beneficios siguen siendo privados. Las grandes corporaciones son las principales beneficiarias, mientras que las pequeñas empresas, los territorios periféricos y los trabajadores quedan en segundo plano.

Además, la UE ha optado por aumentar el gasto en armamento de forma muy significativa, con la creación de una Estrategia Industrial de Defensa que destina miles de millones de euros a la fabricación de armas. Hay que criticar esta deriva: el dinero público debería ir a la transición ecológica, los cuidados y la mejora de las condiciones de vida, no al rearme.

4. DIAGNÓSTICO DE HEGO EUSKAL HERRIA

La imagen que proyecta Hego Euskal Herria es la de una economía con una base industrial sólida en comparación con el resto de Europa, pero que arrastra desequilibrios estructurales importantes y acumula vulnerabilidades que el debate público apenas discute.

4.1. Una economía que crece, pero no como antes

El Producto Interior Bruto (PIB) de Hego Euskal Herria, es decir, el valor total de todo lo que se produce en la CAPV y Navarra, alcanzó los 118.231 millones de euros en 2024. En términos nominales (sin contar el efecto de la inflación) es más del doble que en el año 2000. Esa cifra puede dar una imagen de prosperidad creciente. Sin embargo, si tomamos en cuenta el efecto de los precios y medimos el crecimiento real, la imagen es más modesta: en el periodo analizado la economía de Navarra creció un 45,6% (una media del 1,58% anual) y la de la CAPV un 39,1% (1,39% anual). Son tasas de crecimiento bajas, especialmente comparadas con décadas anteriores.

Ese crecimiento, además, no ha sido uniforme. Hubo una larga expansión hasta 2008, luego una caída brusca con la Gran Recesión que duró hasta 2013, una recuperación gradual, el colapso de 2020 por la pandemia y una nueva recuperación. Por otro lado, la industria manufacturera ha experimentado un estancamiento especialmente llamativo, particularmente en la CAPV, ya que su nivel de producción real en 2024 es prácticamente el mismo que en 2007-2008, hace casi veinte años. Pese a haber más tecnología, más automatización y más inversión en investigación, la producción industrial real no avanza.

4.2. Seguimos siendo un territorio industrial, pero la industria pierde peso

A pesar del estancamiento mencionado, Navarra y la CAPV siguen siendo dos de los territorios con mayor peso industrial de toda Europa. En 2024, la industria genera el 31,2% de la riqueza de Navarra y el 23,3% de la CAPV. La media europea es mucho más baja. Eso es, en principio, una fortaleza.

Sin embargo, esa fortaleza se está erosionando. El peso de la industria en la economía de Hego Euskal Herria ha caído del 32% al 26% entre 2000 y 2024. Los servicios, en cambio, han crecido hasta representar dos terceras partes de la economía. Algunos de esos servicios son de alto valor añadido (ingeniería, diseño, I+D), pero muchos son de bajo valor añadido y empleos precarios.

Dentro de la propia industria, detectamos otro problema: nos especializamos en productos de tecnología media-alta y media-baja, pero tenemos poca presencia en los sectores de tecnología más avanzada, que son los que generan mayor valor añadido, mayor capacidad de innovación y mayor poder de negociación en las cadenas de producción mundiales.

En cuanto al empleo, la industria también mantiene un peso relevante tanto en Navarra (27%) como en la CAPV (20%), esta cuestión se evidencia al compararlo con la media de la UE, que se sitúa en el 17,5%. Sin embargo, existe una clara predominancia del sector servicios, que concentra más del 72% de la ocupación. Además, la evolución entre 2000 y 2024 refleja un proceso continuado de terciarización del empleo, acentuado tras la crisis de 2008, con pérdida de peso de la industria, la construcción y la agricultura. Por otro lado, cabe destacar la baja participación femenina y concentración de hombres en sectores industriales pesados, lo que agrava las desigualdades de género.

4.3. Los salarios no avanzan: una transferencia de riqueza invisible

Uno de los datos más llamativos de nuestro análisis es la evolución de los salarios y las rentas empresariales. En términos reales (teniendo en cuenta la inflación), el salario por trabajador en Hego Euskal Herria apenas ha crecido en lo que llevamos de siglo. En 2000, la remuneración por asalariado era de 43.850 euros (a precios de 2024); en 2024, alcanzó los 44.814 euros. Un crecimiento de sólo un 2,2% en casi dos décadas y media.

Al mismo tiempo, tal y como se ha señalado, la economía sí ha crecido. El resultado es que los trabajadores se llevan una porción cada vez menor de la riqueza que generan, a pesar de que hay 230.000 personas asalariadas más. En el año 2000, los salarios representaban el 49,8% del PIB de Hego Euskal Herria. En 2024, ese porcentaje había bajado al 47,5%. Por tanto, el pastel es más pequeño y hay que repartirlo entre más personas.

En cambio, la parte que va a los propietarios y accionistas (el llamado Excedente Bruto de Explotación) subió del 38,4% al 42,8% del PIB en el mismo periodo. Estos 4,4 puntos se traducen en 16.600 millones de euros, es decir, un crecimiento real del 56,1% en términos absolutos.

¿Cuánto vale esa diferencia? Casi 12.000 euros por persona y año

En el documento hacemos un cálculo que resulta muy llamativo: si cada persona trabajadora hubiera mantenido en 2024 la misma proporción del PIB que tenía en el año 2000, cada persona asalariada ganaría 11.617€ más al año de lo que gana en realidad. Eso equivale a casi 970 euros mensuales por trabajador.

4.4. La inversión no llega donde se necesita

Para que una economía sea dinámica, necesita inversión. Invertir significa comprar maquinaria nueva, construir instalaciones, desarrollar tecnología, formar a trabajadores. La inversión en Hego Euskal Herria cayó bruscamente con la crisis de 2008 y nunca ha vuelto a alcanzar los niveles de entonces. Desde 2009, la inversión total no supera el 20% del PIB, cuando antes lo superaba claramente.

¿Dónde va, entonces, el dinero que generan las empresas? En buena parte, a distribuir dividendos a los accionistas, a la especulación financiera o a adquisiciones de otras empresas. La lógica financiera prima sobre la inversión productiva. Eso es bueno para los propietarios del capital a corto plazo, pero malo para el tejido industrial y para el empleo de calidad a largo plazo.

4.5. La productividad mejora, pero a un ritmo contenido

La productividad mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos para producir bienes y servicios, siendo un indicador clave para analizar el rendimiento económico y la evolución salarial. En Hego Euskal Herria, la industria tiene niveles de productividad superiores a la media de la economía, tanto por persona empleada como por hora trabajada, destacando especialmente la industria manufacturera.

En el contexto europeo, HEH muestra niveles próximos a la media de la UE, acercándose a economías como Francia o Finlandia gracias a un tejido industrial de mayor valor añadido. Además, su evolución desde el año 2000, tanto Navarra como la CAPV muestran un crecimiento de la productividad significativamente superior al de las principales economías europeas en lo que llevamos de siglo. El crecimiento anual de la productividad por persona empleada ha sido del 0,78% y del 1,07% por hora.

4.6. Una economía dependiente del exterior

Hego Euskal Herria exporta mucho (especialmente bienes industriales), pero también depende enormemente del exterior para lo más básico. Los siguientes ejemplos son muestra de ello:

- El 75% de los materiales que se usan en la CAPV vienen de fuera.
- El 49% de las importaciones son combustibles fósiles (gas, petróleo, derivados).
- Los minerales metálicos esenciales para fabricar electrónica, vehículos eléctricos o paneles solares se importan prácticamente al 100%.
- El pico mundial de extracción de petróleo se alcanzó probablemente en 2018. El del gasóleo (el combustible clave para el transporte y la agricultura) en 2016. Esto significa que vamos hacia una escasez inevitable de los recursos en que más dependemos.

Esta dependencia no es solo un problema económico. Es un problema de soberanía: quien controla el suministro de energía o materias primas tiene poder sobre quienes las necesitan. La crisis del gas de 2022 lo demostró dramáticamente.

También es importante la posición de Hego Euskal Herria en las cadenas de producción mundiales: participamos sobre todo en los eslabones intermedios (fabricamos piezas y componentes que otros ensamblan) mientras que las decisiones estratégicas (qué se diseña, qué se vende, cuánto cuesta) las toman empresas situadas fuera de nuestro territorio.

4.7. Los residuos industriales: un problema creciente

La industria genera muchos residuos. En 2019, los residuos industriales de la CAPV ascendieron a 6,67 millones de toneladas; los de Navarra, a 830.000 toneladas (dato de 2021). Pese a que hay sistemas de reciclaje y tratamiento, son insuficientes: en 2016, el reciclaje apenas representaba el 7% de los materiales usados por la economía vasca.

La tragedia del vertedero de Zaldibar, donde miles de toneladas de residuos causaron un desastre medioambiental y la muerte de dos trabajadores, ilustra hasta qué punto este problema está lejos de estar resuelto. Las soluciones que se están adoptando (más incineradoras) no resuelven el problema de fondo: seguimos produciendo más residuos de los que somos capaces de gestionar de forma segura. En el documento proponemos una apuesta clara por reducir la generación de residuos en origen, reparar y reutilizar más, y cerrar los ciclos de materiales en el propio territorio.

5. ¿QUÉ SE HA HECHO HASTA AHORA? BALANCE DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

Se han analizado las políticas industriales que se han aplicado en los últimos cuarenta años: a nivel europeo, en el Estado español y en Hego Euskal Herria. La conclusión general es que se han acumulado planes, instrumentos e instituciones, pero el modelo de fondo no ha cambiado: la intervención pública ha servido sobre todo para facilitar los negocios privados, no para transformar la economía en beneficio de la mayoría.

5.1. La Unión Europea: grandes anuncios, resultados limitados

Durante décadas, la política económica de la UE se basó en una idea simple: el mercado común europeo, con sus cuatro libertades (libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales), crearía prosperidad para todos. El Estado no debía interferir demasiado; su papel era arbitrar, no decidir.

La crisis de 2008 empezó a cuestionar ese modelo, y la pandemia lo enterró definitivamente. Desde entonces, la UE ha lanzado grandes programas de inversión: el Plan de Recuperación (750.000 millones de euros), Horizonte Europa para investigación, los fondos de transición ecológica... Son cantidades enormes. Pero en la práctica, estos fondos funcionan con una lógica que busca socializar los riesgos y privatizar los beneficios: el dinero público garantiza que las inversiones no fallen, pero si tienen éxito, los beneficios van a empresas privadas. El programa estrella de este modelo, InvestEU, no invierte directamente: actúa como un seguro para que inversores privados asuman riesgos que de otro modo no asumirían.

Estos fondos benefician principalmente a las regiones y empresas que ya eran más fuertes, consolidando las desigualdades en lugar de reducirlas. Y denunciamos que la reciente apuesta de la UE por aumentar el gasto en defensa y armamento, con miles de millones de euros adicionales para fabricar armas, supone desviar recursos que deberían ir a la transición ecológica y a mejorar las condiciones de vida de la población.

5.2. El Estado español: muchos planes, poca transformación

La política industrial española ha seguido un camino muy similar. Tras el desmantelamiento de buena parte de la industria pública en los años ochenta y noventa (privatización de Telefónica, Repsol, Endesa y otras empresas del Estado), los sucesivos gobiernos han lanzado planes industriales que, en términos generales, han tenido tres rasgos comunes:

- Se han centrado en facilitar la competitividad de las empresas existentes (incentivos fiscales, digitalización, apoyo a la exportación), sin cuestionar el modelo de fondo.
- Han beneficiado principalmente a las grandes corporaciones, con escasa atención a las pequeñas y medianas empresas que forman el grueso del tejido productivo
- Han ignorado o abordado de forma muy superficial las cuestiones de justicia social, igualdad de género y sostenibilidad ecológica.

El Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2024) introduce algunos avances, como por ejemplo la posibilidad de recuperar ayudas públicas si una empresa se deslocaliza, o algunos instrumentos para intervenir en empresas estratégicas, pero sigue siendo insuficiente: depende demasiado de exenciones fiscales (que benefician a quien más gana), carece de mecanismos robustos de control democrático y apenas menciona la perspectiva de género.

5.3. Hego Euskal Herria: densa arquitectura institucional sin transformación real

La CAPV: muchos instrumentos, el mismo modelo

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se ha construido una de las políticas industriales más elaboradas del Estado. Desde los años ochenta se han creado instituciones (SPRI, parques tecnológicos, agencias de desarrollo), instrumentos financieros (fondos de capital riesgo, avales, préstamos), programas de innovación y redes de clústeres sectoriales. El gasto en investigación y desarrollo es de los más altos de Europa. Todo esto ha contribuido a mantener una base industrial relativamente sólida.

Sin embargo, se identifica un patrón que se repite una y otra vez: el dinero público ayuda a que una empresa crezca y se fortalezca, pero cuando esa empresa tiene éxito, acaba siendo cedida al control o vendida a inversores privados (a menudo extranjeros) sin que la sociedad vasca recupere lo que puso. Los casos de Gamesa (energía eólica), Euskaltel (telecomunicaciones) o ITP (motores de aviación) son ejemplos de este ciclo: inversión pública, éxito empresarial, venta al mejor postor.

También es llamativa la falta de mecanismos de alerta temprana y de intervención ante crisis empresariales. Cuando una empresa entra en dificultades, la respuesta institucional suele llegar tarde y es insuficiente. Los casos de Fagor Electrodomésticos (una de las mayores cooperativas de Europa, quebró en 2013), la papelera CEL o el astillero La Naval son ejemplos de cómo el Estado vasco, pese a tener participación en esas empresas, no actuó a tiempo para evitar la destrucción de miles de empleos.

El Plan de Industria – Euskadi 2030, presentado en junio de 2025, prevé casi 4.000 millones de euros de inversión pública hasta 2028. Aunque introduce algunos elementos nuevos, reproduce el mismo patrón: el dinero público garantiza los riesgos de las inversiones privadas, sin condiciones sociales ni ecológicas robustas, sin mecanismos reales de control democrático y sin exigir a las empresas beneficiarias que mantengan el empleo ni arraiguen su actividad en el territorio.

Navarra: avances en el enfoque, limitaciones en la práctica

Por lo que atañe a Navarra, ha desarrollado una política industrial con algunas especificidades propias. Sus Planes Industriales y sus Estrategias de Especialización Inteligente (S3 y S4) han apostado por sectores como la automoción, la agroalimentación y las energías renovables. Concretamente, la S4 de 2021 introdujo un enfoque de cadenas de valor que supone un avance positivo: en lugar de apoyar sectores aislados, intenta entender cómo se relacionan entre sí y dónde están los puntos más débiles. Sin embargo, la ejecución práctica sigue concentrándose en las empresas más grandes y no alcanza al conjunto del tejido productivo.

5.4. Lo que tienen en común: un patrón que no ha cambiado

Más allá de las diferencias entre niveles institucionales, el documento identifica un conjunto de rasgos que se repiten en todos ellos y que explican por qué, pese a todos los planes y recursos invertidos, el modelo económico no ha cambiado en lo esencial:

El patrón que se repite en la política industrial

- Las decisiones las toman técnicos y empresarios, no los trabajadores ni la ciudadanía.
- El dinero público reduce el riesgo de los inversores privados, pero los beneficios son privados.
- No hay condiciones claras para las empresas que reciben ayudas: pueden deslocalizar, cerrar o repartir dividendos sin devolver lo que recibieron.
- La perspectiva de género está ausente o es puramente simbólica: se habla de incorporar mujeres a puestos directivos, pero no se revaloriza el trabajo de cuidados ni los empleos feminizados, ni la carga desigual en conciliación que condiciona trayectorias laborales.
- Cuando una empresa entra en crisis, la respuesta llega tarde y prioriza salvar a los accionistas, no el empleo.
- La sostenibilidad ecológica es un objetivo declarado, pero sin mecanismos vinculantes que obliguen a las empresas a respetarla.

6. PROPUESTAS PARA UN MODELO DIFERENTE

El diagnóstico es claro: el modelo actual no funciona para la mayoría de la población. Las propuestas que desarrollamos en el documento parten de una convicción: es posible hacer las cosas de otra manera. Para ello, proponemos actuar en dos grandes frentes que se complementan: primero, medidas generales de gobernanza, financiación, normativa, trabajo y territorio que cambian las reglas del juego en toda la economía; segundo, una política sectorial que decide qué actividades hay que impulsar, cuáles transformar y cuáles abandonar progresivamente.

Las propuestas se dividen en dos tipos que se refuerzan mutuamente. Las propuestas reformistas buscan mejorar las condiciones laborales, ampliar el poder sindical y poner límites al poder empresarial dentro del sistema actual. Las transformadoras apuntan a cambiar estructuras más profundas: quién es dueño de qué, quién decide qué se produce, y cómo se distribuye la riqueza generada. Las primeras abren el camino para las segundas y son parte de la transición ecosocial.

6.1. Gobernanza: ¿quién decide?

Actualmente, las grandes decisiones económicas (qué se produce, dónde se instala una empresa, cuándo se cierra una fábrica) las toman principalmente los propietarios del capital y sus gestores. Las personas trabajadoras, los sindicatos, los municipios y la ciudadanía en general tienen muy poca capacidad de influencia.

Quién manda en la economía

La propuesta central es crear una estructura de gobernanza que garantice la participación real de los trabajadores y las comunidades locales en las decisiones económicas. Eso implica:

- Crear Consejos Económicos Locales en cada comarca, donde trabajadores, organizaciones sociales, productores y municipios deliberen y decidan sobre las prioridades económicas del territorio.
- Crear un Ente Vasco de Participaciones Industriales que coordine y supervise las empresas en las que el sector público tiene participación, asegurando que sirven al interés general.
- Desarrollar una agencia pública con recursos suficientes para hacer seguimiento del tejido industrial, detectar problemas antes de que sea tarde y actuar con rapidez cuando una empresa entra en dificultades.
- Garantizar que las personas funcionarias que gestionan la política industrial tengan formación específica en derecho laboral, economía real y procesos de transformación empresarial, incluyendo cómo convertir empresas en crisis en cooperativas o empresas públicas.

Qué hacer cuando una empresa está en crisis

Se proponen protocolos claros de actuación ante crisis empresariales, para que la respuesta pública no llegue cuando ya es demasiado tarde:

- Sistema de alerta temprana: seguimiento continuo de las empresas con participación pública o que han recibido ayudas, con participación sindical.

- Cuando una empresa recibe ayudas o avales públicos, el sector público debe tener representación con voz en sus órganos de gobierno, y los trabajadores también.
- Si una empresa entra en concurso de acreedores (es decir, no puede pagar sus deudas), la administración pública debe poder personarse para defender el empleo y la actividad productiva, adquirir la empresa si es necesario y transformarla en pública o cooperativa.
- Fomento de fusiones entre pequeñas y medianas empresas hacia fórmulas cooperativas o de economía social, para tener estructuras más resilientes y con capacidad para competir con las grandes corporaciones.

6.2. Financiación: ¿quién pone el dinero y con qué condiciones?

El dinero público debe servir al interés colectivo. Parece obvio, pero en la práctica no siempre ocurre así: las ayudas, los avales y los fondos públicos a menudo acaban beneficiando principalmente a grandes empresas sin condiciones claras de contraprestación social.

Control público de la inversión privada

- Cualquier empresa que reciba financiación, avales o subvenciones públicas debe comprometerse a mantener el empleo, no deslocalizar la actividad, reinvertir parte de sus beneficios en el territorio y respetar estándares laborales y medioambientales. Si no lo hace, debe devolver lo que recibió.
- Los sindicatos deben tener derecho a información completa sobre las decisiones de inversión de las empresas y poder vetar aquellas que pongan en riesgo el empleo o las condiciones laborales.
- La inversión extranjera en sectores estratégicos (telecomunicaciones, energía, infraestructuras críticas) debe estar sujeta a control público, usando los mecanismos que ya permite la normativa europea.
- Cada euro de dinero público invertida debe ser auditada periódicamente para comprobar que cumple su objetivo.

Una nueva arquitectura financiera pública

- Crear un banco público de desarrollo que financie proyectos a largo plazo que los bancos privados no quieren financiar porque no generan beneficios rápidos pero son esenciales para la sociedad: reconversión de sectores contaminantes, creación de cooperativas, proyectos de economía circular, etc.
- Crear un fondo público para la transición energética justa que ayude a las empresas y trabajadores de los sectores que deben reconvertirse (por ejemplo, los que dependen del petróleo o el gas) a hacer esa transición sin perder el empleo ni los ingresos.
- Avanzar hacia una aseguradora pública, ya que las compañías de seguros privadas acumulan enormes recursos sin control democrático.
- Movilizar el dinero ahorrado en los planes de pensiones vascos (EPSVs) para invertirlo en la industria y la vivienda del territorio, con garantías y control público.

Más inversión en innovación, pero orientada al bien común

- Aumentar progresivamente los impuestos a las rentas más altas (a partir de cinco veces el salario mínimo) para desincentivar la acumulación de riqueza y fomentar la reinversión en producción.
- Crear un inventario público de tecnologías infrautilizadas y transferirlas al tejido productivo local.
- Impulsar centros públicos de investigación e innovación vinculados directamente a las necesidades de las empresas locales y cooperativas.

6.3. Marco legal: cambiar las reglas del juego

Las leyes actuales favorecen al capital sobre el trabajo. Eso no es inevitable: es una elección política que puede deshacerse con otras elecciones políticas. Se proponen un conjunto de cambios legales que devolverían poder a los trabajadores y pondrían límites a las decisiones empresariales cuando estas perjudican al conjunto de la sociedad.

Derogar las reformas laborales más dañinas

Las reformas laborales de 2010 y 2012 facilitaron los despidos masivos, permitieron a las empresas no aplicar los convenios colectivos pactados y abarataron el coste de echar trabajadores. Estas reformas deben deshacerse:

- Prohibir los despidos cuando la empresa tiene beneficios.
- Recuperar el control administrativo de los despidos colectivos, para que la Administración pueda impedir despidos injustificados.
- Restablecer los salarios de tramitación para los trabajadores despedidos improcedentemente.
- Garantizar que las empresas apliquen los convenios colectivos pactados.

Impedir deslocalizaciones y cierres

- Hacer legalmente obligatorio que la Administración convoque una Mesa de Reindustrialización cuando una empresa quiera cerrar o deslocalizar, con capacidad para impedirlo si el cierre no está justificado.
- Cualquier empresa que cierre y se haya beneficiado de ayudas públicas debe devolverlas íntegramente.
- Si una empresa quiere cerrar una fábrica rentable, la Administración debe poder expropiar el inmueble y las instalaciones para que otra empresa o cooperativa continúe la actividad.

Más derechos sindicales

- Ampliar el derecho de los comités de empresa a recibir información completa sobre las finanzas, las inversiones y los planes de la empresa.
- Otorgar a los comités de empresa derecho de veto sobre decisiones de inversión, deslocalización o externalización que afecten al empleo.
- Garantizar que estas decisiones se tomen en el ámbito local, no solo en las sedes centrales de las grandes corporaciones.

Normas para la transición ecológica

- Establecer legalmente la desinversión progresiva en combustibles fósiles y prohibir nuevas infraestructuras de gas o petróleo.
- Regular la instalación de energías renovables para que no se haga en zonas protegidas ni suelos agrícolas, y para que las comunidades locales afectadas tengan derecho a veto.
- Transferir a Hego Euskal Herria las competencias necesarias para poder tomar estas decisiones sin depender de la autorización del Estado central.

6.4. Trabajo y formación: las personas en el centro

Una economía al servicio de la mayoría necesita que las personas que trabajan en ella puedan vivir dignamente. El informe propone medidas concretas tanto en materia de condiciones laborales como de formación y cuidados.

Condiciones de trabajo

- Fijar el Salario Mínimo Interprofesional en el 60% del PIB por habitante. Actualmente el SMI se calcula sobre la base del salario medio, lo que lo ancla a la baja. Calcularlo sobre el PIB per cápita significa que cuando la economía crece, los salarios más bajos también suben de verdad.
- Reducir la jornada laboral de forma progresiva sin reducción de salario. Si hay menos trabajo disponible (porque la automatización elimina empleos), la solución justa es repartirlo mejor, no concentrarlo en quienes ya trabajan mientras otros se quedan fuera.
- Avanzar en políticas de vivienda accesible (el documento remite a las propuestas específicas de ELA de 2022 en esta materia).

Formación profesional orientada a las necesidades reales

- Crear mapas comarcales de necesidades formativas, elaborados con participación sindical y comunitaria, para que la formación responda a lo que el territorio realmente necesita, no solo a lo que las empresas más grandes demandan.
- Reforzar los centros públicos de formación profesional, en lugar de canalizar los fondos de formación a través de patronales y sindicatos mayoritarios que se los asignan a sí mismos.

- Crear centros públicos de formación técnico-profesional vinculados a la economía ecológica y social, con fuerte componente práctico y comunitario.
- Invertir en la recualificación de trabajadores ante la automatización y la inteligencia artificial, para que nadie quede fuera del mercado laboral por falta de formación.

Los cuidados: el trabajo que sostiene la vida

- Avanzar hacia la inclusión de cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados: permisos más largos y flexibles, horarios compatibles con el cuidado, servicios de apoyo en el trabajo y complementos salariales asociados a la menor disponibilidad para acceder a complementos por turnos, horarios o productividad (la mayor parte de la brecha salarial procede de complementos salariales discrecionales).
- Reconocer económicamente el trabajo de cuidados no remunerado e integrarlo en las políticas públicas.
- Crear infraestructuras comunitarias de cuidado (guarderías, centros de día, servicios de atención a domicilio) gestionadas públicamente y con condiciones laborales dignas para sus trabajadoras.
- Revertir la externalización de servicios sanitarios y sociales: lo que se ha privatizado debe volver a ser público.

6.5. Recursos, territorio y soberanía: producir aquí, decidir aquí

La dependencia externa de materiales, energía y tecnología no es solo un problema económico: es un problema de poder. Quien controla los recursos estratégicos tiene poder sobre quienes los necesitan. Se proponen un conjunto de medidas para reducir esa dependencia y construir mayor soberanía productiva en Hego Euskal Herria.

Reducir la dependencia de materias primas y energía

- Hacer auditorías detalladas de qué materiales y energía usamos, de dónde vienen y qué alternativas locales o menos dependientes existen.
- Desarrollar minería urbana: recuperar materiales valiosos de los residuos electrónicos, las baterías usadas o los vehículos al final de su vida útil, en lugar de importar materias primas vírgenes.
- Alargar la vida útil de los equipos tecnológicos (paneles solares, aerogeneradores, vehículos eléctricos) para reducir la necesidad de extraer nuevas materias primas.
- Crear una empresa pública de energía renovable que garantice el acceso universal a la energía y redistribuya los beneficios entre la ciudadanía, combinando instalaciones propias con redes cooperativas locales.
- Moratoria (pausa) sobre la construcción de nuevas incineradoras de residuos industriales; invertir ese dinero en plantas de reciclaje avanzadas.

Planificar el territorio para la gente, no para el capital

- Elaborar un inventario de infraestructuras industriales existentes y planificar las nuevas en función de las necesidades del territorio, no de la rentabilidad para los inversores.
- Fomentar las cadenas de producción cortas: que la distancia entre quien produce y quien consume sea la menor posible, reduciendo costes de transporte, dependencia del exterior y huella ecológica.
- Diseñar parques industriales basados en los sistemas productivos locales, con recursos compartidos y gobernanza público-comunitaria.
- Impulsar el transporte ferroviario de mercancías como alternativa al camión, más eficiente energéticamente y con menor impacto ambiental.

Soberanía tecnológica

- Crear una infraestructura pública de centros de datos (servidores) con criterios de seguridad y acceso democrático, en lugar de depender de las grandes corporaciones tecnológicas.
- Desarrollar software público de código abierto (es decir, que cualquiera puede usar y mejorar) para que las empresas y los servicios públicos no dependan de licencias privadas de Microsoft, Google u otras multinacionales.
- Impulsar una inteligencia artificial pública orientada a resolver necesidades sociales concretas: diagnóstico médico, gestión de residuos, optimización de redes de transporte, etc.
- Crear un catálogo público de cooperativas y entidades públicas capaces de ofrecer servicios tecnológicos avanzados, para que los municipios y empresas locales no tengan que contratar siempre a grandes consultoras transnacionales.

Arraigo: que las empresas se queden

- Uno de los problemas más graves que identificamos es que empresas creadas y apoyadas con dinero público acaban siendo vendidas a inversores extranjeros que no tienen ningún vínculo con el territorio. Para evitarlo:
- Cualquier empresa que reciba apoyo público debe comprometerse legalmente a no deslocalizar su actividad durante un período mínimo.
- Establecer un sistema de impuestos que penalice a las empresas que no reinviertan sus beneficios en el territorio.
- Reorientar los fondos de internacionalización (que ahora se usan para que las empresas vendan fuera) hacia la relocalización de producción que ahora se hace fuera.
- Integrar las políticas en favor de la normalización del euskera en la política industrial, para garantizar su uso vehicular en el trabajo y a nivel empresarial.

Fortalecer la demanda interna y externa

Una economía necesita que la gente tenga capacidad de compra. Si los salarios bajan y el trabajo es precario, el consumo baja y las empresas venden menos. Por eso las medidas que mejoran los salarios, reducen la jornada laboral y garantizan el acceso a la vivienda no son solo medidas laborales: también son política económica. Se propone:

- Crear agencias públicas que actúen como intermediarias entre productores locales y consumidores, asegurando precios justos para ambos y eliminando los márgenes especulativos de los intermediarios.
- La figura de los Consejos Económicos Locales, que también tendrán capacidad de planificar la oferta productiva del territorio en función de las necesidades reales de la población.
- Revisar la política comercial exterior para orientarla hacia relaciones de intercambio equitativas con otros países, no solo hacia la maximización de las exportaciones.

7. QUÉ SECTORES PRIORIZAR, TRANSFORMAR Y CUÁLES ABANDONAR

Tras el análisis profundo de los diferentes sectores económicos para ver cuáles dependen demasiado de importaciones, cuáles están demasiado orientados a la exportación y son vulnerables a los cambios mundiales, cuáles tienen potencial para generar empleo local de calidad y cuáles deben reducirse porque son ecológicamente insostenibles o éticamente inaceptables, agrupamos los sectores en cadenas de producción, y las cadenas de producción en tres categorías, más una cuarta de sectores que deben abandonarse:

Las cuatro categorías del análisis sectorial

1. Cadenas para la reproducción social: alimentación, construcción, cuidados, servicios básicos y bienes de consumo esencial. Son los sectores que garantizan y sostienen la vida de la ciudadanía.
2. Cadenas para la transición ecológica: energía, reciclaje, movilidad y logística. Son los sectores que determinan si avanzamos o retrocedemos en la lucha contra el cambio climático.
3. Cadenas para la capacitación tecnológica: diseño, ingeniería, maquinaria y servicios a empresas. Son los sectores que determinan hasta qué punto somos capaces de producir con nuestros propios medios tecnológicos.
4. Sectores a desinvertir: actividades que deben reducirse o eliminarse por razones ecológicas, sociales o éticas.

7.1. Cadenas para la reproducción social: lo que necesitamos para vivir

Alimentación: comer de aquí, producir aquí

La cadena alimentaria de Hego Euskal Herria tiene un problema de dependencia: los insumos básicos (productos químicos para la agricultura, envases, algunos ingredientes) vienen en gran parte de fuera. Al mismo tiempo, los sectores con mayor orientación exportadora (bebidas, química) también dependen enormemente de importaciones, lo que crea una vulnerabilidad doble.

El objetivo estratégico es avanzar hacia la soberanía alimentaria: que seamos capaces de producir aquí la mayor parte de lo que comemos, de forma agroecológica y sostenible. Las propuestas concretas incluyen facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario (con ayudas específicas y formación), fomentar el bosque autóctono frente a las plantaciones de pino y eucalipto, y crear una empresa pública de distribución y logística alimentaria. Esta empresa actuaría como intermediaria entre productores locales y consumidores, garantizando precios justos para ambos y eliminando los márgenes especulativos de los grandes distribuidores.

Construcción: rehabilitar, no construir de nuevo

La construcción es uno de los sectores que más materiales y energía consume. Depende enormemente del acero, los metales y los productos químicos que vienen de fuera, aunque al menos la mayor parte de esas importaciones proviene del Estado español, lo que da cierto margen de relocalización.

La prioridad no debe ser seguir construyendo más edificios nuevos, sino rehabilitar los que ya existen: mejorar el aislamiento térmico de los hogares actuales reduciría enormemente el consumo de energía y las emisiones, además de crear empleo local que no puede deslocalizarse. El informe también propone apostar por materiales de construcción reciclados o reutilizables y por la formación en construcción bioclimática.

Cuidados: poner en el centro lo que sostiene la vida

El sector de los cuidados (sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia, educación infantil) es esencialmente local: sus trabajadores no pueden deslocalizar su trabajo porque están físicamente junto a las personas que cuidan. Sus principales problemas no son de dependencia exterior sino de modelo de prestación: infrafinanciación, externalización a empresas privadas y condiciones laborales muy precarias para trabajadoras que en su mayoría son mujeres.

El documento propone revertir los procesos de privatización y externalización de estos servicios, garantizar condiciones laborales dignas para sus trabajadoras, construir más infraestructuras públicas de cuidado y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado que hacen millones de personas (principalmente mujeres) en sus hogares.

Servicios básicos: agua, transporte, energía, telecomunicaciones

Los servicios básicos son aquellos a los que toda la población tiene derecho de acceso independientemente de su renta: el agua, el transporte público, la energía, las telecomunicaciones. Su principal vulnerabilidad no es la dependencia exterior sino la privatización: cuando estos servicios están en manos privadas, su objetivo es el beneficio, no garantizar el acceso universal. El informe propone recuperar la gestión pública de los servicios básicos privatizados y blindar la infraestructura digital crítica frente a la compra por parte de inversores extranjeros.

7.2. Cadenas para la transición ecológica: cambiar cómo producimos energía y nos movemos

Energía: dejar los fósiles, pero con planificación

La dependencia energética de Hego Euskal Herria es uno de sus mayores riesgos: el gas natural representa el principal combustible y se importa casi al 100%. La transición hacia las energías renovables es necesaria e inevitable, pero no puede hacerse de cualquier manera.

Por un lado, no se pueden instalar parques eólicos o solares en zonas protegidas o en tierras agrícolas de alto valor. Las comunidades locales deben tener derecho a decidir sobre estas instalaciones. Por otro lado, la transición energética debe ir acompañada de una reducción real del consumo de energía: la electrificación de todo no es posible ni suficiente, porque la electricidad solo representa el 23% de la energía que consumimos. El 77% restante (calefacción industrial, transporte pesado, procesos químicos...) es mucho más difícil de electrificar.

Las propuestas concretas incluyen: crear una empresa pública de energía renovable que garantice el acceso universal a la energía y redistribuya los beneficios; prohibir nuevas infraestructuras de gas o petróleo; y financiar planes de reconversión para los trabajadores de los sectores energéticos que deben cerrar.

Reciclaje y economía circular: producir menos basura, aprovechar más

La economía circular es la idea de que los residuos de un proceso productivo deben convertirse en materia prima de otro. Es lo opuesto al modelo actual, donde los productos se fabrican, se usan y se tiran. Hego Euskal Herria está muy lejos de ese ideal: en 2016, el reciclaje apenas representaba el 7% de los materiales usados.

Para avanzar en esta dirección, el informe propone una moratoria sobre la construcción de nuevas incineradoras (que destruyen los materiales en lugar de recuperarlos) e invertir en plantas de reciclaje avanzadas. También propone planes comarcales de economía circular y crear puntos locales de preparación para la reutilización y reparación de productos. La reparación de bienes como electrodomésticos, ropa, o electrónica es una actividad intensiva en trabajo humano local que genera empleo mientras reduce residuos.

Movilidad: mover menos cosas, moverlas mejor

El sector del automóvil es uno de los pilares industriales de Hego Euskal Herria, especialmente en Navarra. Pero está en plena transformación: el motor de combustión tiene los días contados, y la competencia con productores asiáticos de vehículos eléctricos es feroz. Además, los componentes esenciales para los vehículos eléctricos (baterías, electrónica, motores) se importan en gran medida de países extraeuropeos.

No se propone abandonar el sector del automóvil de un día para otro, sino reorientarlo: producir más componentes localmente, reforzar los servicios de transporte público de pasajeros, y reducir la movilidad innecesaria de mercancías reorganizando la producción para que las cadenas sean más cortas y locales. Además, el tren de mercancías debe ganar terreno frente al camión.

7.3. Cadenas para la capacitación tecnológica: saber hacer aquí lo que ahora compramos fuera

Diseño, ingeniería y maquinaria

Este sector es el que proporciona al conjunto de la industria las herramientas, máquinas y conocimientos técnicos que necesita para producir. Es un sector con fuerte vocación exportadora pero también con importante dependencia de componentes eléctricos y electrónicos que vienen de fuera, especialmente de China.

El objetivo es reducir esa dependencia tecnológica produciendo más componentes aquí, impulsando la investigación en equipos eléctricos y máquinas-herramienta, y avanzando hacia acuerdos de colaboración con otros países (tipo joint ventures: empresas conjuntas en que dos socios aportan lo que el otro no tiene) para acceder a tecnologías que no podemos desarrollar solos a corto plazo.

Servicios a empresas

Los servicios de consultoría, finanzas, software empresarial, investigación y desarrollo, publicidad y similares son esenciales para que el resto de la economía funcione. El problema es que la mayor parte de estos servicios avanzados que se consumen en Hego Euskal Herria se compran en Madrid o Barcelona (que concentran el 50% del mercado), o directamente a corporaciones transnacionales.

Por ello, hay que crear un catálogo público de cooperativas y entidades públicas capaces de ofrecer estos servicios, y que la Administración priorice la contratación de proveedores con arraigo local. Esto no solo reduce la dependencia exterior: también genera empleo cualificado en el territorio.

7.4. Sectores que deben reducirse

Una política industrial transformadora no puede limitarse a apoyar los sectores 'buenos'. También debe tomar decisiones difíciles sobre qué actividades hay que abandonar progresivamente. El documento identifica cinco sectores prioritarios para la desinversión pública:

- Industrias extractivas: minería y extracción de recursos naturales, por su presión sobre los ecosistemas.
- Coquerías y refino de petróleo: el corazón del modelo energético fósil que hay que superar.
- Transporte aéreo: responsable de una proporción desproporcionada de emisiones de gases de efecto invernadero, y muy difícil de descarbonizar a corto plazo.
- Turismo globalizado de largo recorrido (agencias de viajes y turoperadores que organizan vuelos baratos y turismo masivo): un modelo que destruye destinos turísticos locales, genera enormes emisiones y beneficia principalmente a grandes corporaciones.
- Fabricación de armas y municiones: por razones éticas y de seguridad colectiva. Las capacidades industriales y tecnológicas de este sector deben reconvertirse hacia usos civiles socialmente útiles.

Estas desinversiones no pueden hacerse de forma abrupta ni a costa de las plantillas. Hay que garantizar planes de transición justos: mantener los ingresos durante el proceso, ofrecer formación para nuevos empleos, y dar voz a las personas trabajadoras y sindicatos en cómo y cuándo se hace la transición.

8. CONCLUSIONES

La conclusión principal puede resumirse en pocas palabras: la economía de Hego Euskal Herria tiene fortalezas reales, pero acumula vulnerabilidades estructurales que las políticas industriales aplicadas hasta ahora no han resuelto porque no cuestionan el modelo de fondo. Hacen falta cambios profundos en quién decide, quién financia y para qué se produce.

8.1. Lo que el diagnóstico nos dice

La imagen que emerge del análisis es la de una economía que crece en términos nominales, pero cuyos frutos se distribuyen de forma cada vez más desigual. Los salarios reales llevan más de veinte años estancados mientras los beneficios empresariales han crecido. La inversión productiva no ha recuperado los niveles anteriores a 2008. El tejido industrial sigue siendo relativamente sólido, pero se especializa en eslabones de valor medio, sin avanzar hacia posiciones de mayor poder tecnológico o de decisión. Y la dependencia de combustibles fósiles y materias primas importadas nos hace vulnerables a disrupciones externas sobre las que no tenemos control.

Al mismo tiempo, observamos que en las políticas industriales se repite un mismo patrón tanto a nivel europeo y estatal como Hego Euskal Herria: el dinero público reduce los riesgos de los inversores privados, pero los beneficios son privados; la gobernanza es tecnocrática, con escasa participación real de las personas trabajadoras; no hay condiciones claras ni mecanismos eficaces de control; y la perspectiva de género llega tarde y de forma superficial, sin abordar la raíz del problema.

8.2. Los tres principios que orientan las propuestas

Las propuestas y medidas deben tomar como punto de referencia los siguientes principios:

1. Las empresas estratégicas deben ser de propiedad pública, cooperativa o social

No se trata de estatizar todo, sino de que en los sectores clave para la sociedad -energía, agua, alimentación, cuidados, tecnología estratégica- la lógica del beneficio privado no sea la que decide. La propiedad pública o cooperativa no garantiza por sí sola la democracia económica, pero sin ella es muy difícil orientar la producción al interés general en lugar de al beneficio de los accionistas. Este principio implica también recuperar empresas en crisis antes de que destruyan empleo, y exigir condiciones claras a cambio de cualquier apoyo público.

2. Los trabajadores deben tener poder real en las decisiones económicas

La democracia no puede terminar en la puerta de la empresa. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben tener información real sobre lo que pasa en sus empresas, capacidad de bloquear decisiones que les perjudiquen y capacidad de fiscalización sancionadora en las empresas que reciben dinero público. A nivel territorial, los Consejos Económicos Locales deben ser espacios donde la ciudadanía organizada, y no solo los técnicos y los empresarios, decida qué se produce, cómo y para quién.

3. La producción debe responder a las necesidades de la gente y del planeta, no al beneficio privado

Esto significa preguntarse en cada decisión económica: ¿quién se beneficia y quién paga los costes? La transición ecológica no puede hacerse si seguimos produciendo lo mismo pero con paneles solares en lugar de carbón. Hay que cambiar qué producimos: más cuidados, más vivienda, más transporte público, más alimentos sanos y locales; y menos armamento, menos lujo, menos turismo masivo de largo recorrido. Esta reorientación no puede imponerse de arriba abajo: debe construirse con la participación de los propios trabajadores de cada sector.

8.3. Un camino, no un salto

No proponemos una revolución de un día para otro, sino un camino en el que las medidas más inmediatas (mejorar salarios, ampliar derechos sindicales, poner condiciones a las ayudas públicas) crean las condiciones para los cambios más profundos: la propiedad social de los medios de producción, la planificación democrática de la economía y la reorganización de la producción dentro de los límites del planeta.

Si se actúa de forma coordinada y coherente sobre todos los frentes simultáneamente (financiación, legislación, gobernanza, trabajo, territorio, sectores), se puede abrir una vía para transformar el modelo actual.

El reto, en definitiva, es intervenir de forma diferente: a favor de la mayoría, con control democrático, dentro de los límites ecológicos y con las personas trabajadoras (todas, incluidas las que cuidan) en el centro.